



**H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO**

**DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMA
AL ARTÍCULO 2099 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

A la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de reforma del artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 fracción II y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se formula dictamen en atención a las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Proceso Legislativo.

La Comisión de Justicia recibió, por razón de turno y materia, en la sesión plenaria de fecha 27 de abril de 2017, la iniciativa referida en el preámbulo de este dictamen.

La Comisión de Justicia radicó la iniciativa el 11 de mayo del mismo año, fecha misma en que se aprobó por unanimidad de votos, la siguiente metodología de trabajo para estudio y dictamen: a) Remisión, por medio de oficio, de la iniciativa para solicitar opinión al Supremo Tribunal de Justicia. Así como, por medio de correo electrónico, a la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato; a la Escuela de Derecho de la Universidad De La Salle Bajío; a la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Plantel León; a la Escuela de Derecho de la Universidad de León; y al Colegios de Abogados en el Estado de Guanajuato. Señalando como plazo para la remisión de las opiniones, dentro de los 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la solicitud. b) Solicitar al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, opinión y un comparativo con



**H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO**

legislación de otros estados, en relación a la iniciativa, concediéndole el término de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la solicitud, para que emita la misma. c) Subir la iniciativa al portal del Congreso para consulta y participación ciudadana, por el término de 10 días hábiles. d) Elaboración de un documento en el que se concentren las diversas observaciones que se hayan formulado a la iniciativa. Tarea que estará a cargo de la secretaría técnica. e) Integrar mesa de trabajo para análisis de la iniciativa y las observaciones formuladas, por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Justicia; diputados que deseen sumarse; representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; e Instituto de Investigaciones Legislativas. f) Reunión o reuniones de mesa de trabajo para análisis de la iniciativa y las opiniones. g) Comisión de Justicia para análisis y, en su caso, acuerdos de dictamen. h) Comisión de Justicia para la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen.

Seguimiento a la metodología de trabajo.

En relación al inciso a) de la metodología remitió opinión el licenciado Daniel Tovar Olvera, Presidente del Colegio de Abogados de San Miguel de Allende, Gto.

En cumplimiento a lo solicitado en el inciso b), el Instituto de Investigaciones Legislativas formuló su opinión, y un comparativo con legislación de otros estados.

Respecto al inciso c), se subió la iniciativa al portal del Congreso para recibir opiniones de la ciudadanía. No se recibieron opiniones.

La secretaría técnica en cumplimiento del inciso d) elaboró un concentrado de observaciones y un comparativo con legislación vigente.



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

El 5 de junio de 2017, la Comisión de Justicia llevó a cabo la mesa de trabajo, en la que participaron el Magistrado Eloy Zavala Arredondo, titular de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el maestro Plinio Manuel Martínez Tafolla, Director del Instituto de Investigaciones Legislativas, así como asesores de las y los diputados.

Posteriormente, en reunión de la Comisión de Justicia celebrada el 10 de abril de 2018, la presidencia de la misma, instruyó la elaboración de un dictamen en sentido negativo, en virtud de que del análisis de la iniciativa, así como de las opiniones que de manera escrita y en la mesa de trabajo respectiva se expresaron, se desprende que la propuesta tiene por objeto evitar la mala práctica en la figura del mandato judicial, situación que hubo coincidencia en que no encuentra sustento para estimarlo así.

II. Objeto de la iniciativa.

Los iniciantes con motivo de su propuesta legislativa señalan que:

«Impulsar una eficiencia cada vez mayor de la administración pública en todos sus poderes, en todas sus funciones y en todos sus procesos es un compromiso que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional asumimos con absoluta seriedad y convicción, porque sabemos que este es un trabajo que la sociedad demanda y requiere para consolidar el estado de derecho y el desarrollo de nuestra entidad.

Consideramos que para lograr estos avances es necesario un análisis profundo e integral de nuestro marco jurídico, en el que detectemos áreas de oportunidad para perfeccionar las leyes al servicio de la ciudadanía. Fruto de este ejercicio de reflexión jurídica presentamos una propuesta para reformar el artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en relación a las ratificaciones de los mandatos que se otorgan por medio de una escritura pública.

Ya que, para actuar en un proceso jurisdiccional, es necesario tener la capacidad para postular, quien carezca de tal capacidad debe hacerse representar por un profesional en Derecho, lo que constituye la representación legal. La fuente de esta representación se encuentra en el mandato judicial, el cual se confiere precisamente para promover juicios e intervenir en ellos.

Es necesario mencionar que el mandato judicial es un contrato que se perfecciona desde el momento de que se manifiesta la voluntad tanto del otorgante como de quien lo acepta, esto con total independencia de la ratificación ante el tribunal de autos, por lo que no es dable que se tenga que efectuar dicha ratificación para que el mandato judicial tenga vigencia plena.



**H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO**

En armonía con la naturaleza del mandato, nuestra propuesta en esta iniciativa de reforma tiene como objeto que el mandato pueda ejercerse desde el momento mismo de su otorgamiento, sin necesidad de que sea ratificado por el tribunal de los autos.

Además, consideramos que con este ajuste al artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato de dar mayor celeridad a los juicios en los que se otorgue el mandato judicial, lo que sin duda hará que se tenga una justicia más expedita.»

III. Consideraciones.

Es importante destacar que hubo coincidencia de opinión tanto del Supremo Tribunal de Justicia, como del Instituto de Investigaciones Legislativas de este Congreso del Estado, en cuanto a que, de acuerdo a una correcta interpretación del artículo 2099 del Código Civil, la ratificación no se requiere cuando el mandato judicial se otorga en escritura pública y que tampoco se evidencia alguna mala práctica en tal acto, lo que hace innecesaria la reforma planteada.

Esta Comisión de Justicia está de acuerdo con lo anteriormente expuesto, pues a esta conclusión se arriba con la comprensión, tanto de los diferentes tipos de mandato, como de la construcción normativa del dispositivo en nuestra legislación civil. A efecto de dar claridad a ello, consideramos pertinente plasmar en el presente dictamen la opinión del Instituto de Investigaciones Legislativas de este Congreso del Estado, que expone de manera puntual lo siguiente:

«CONSIDERACIONES SOBRE LA INICIATIVA

En palabras de Bernardo Pérez Fernández del Castillo¹, el mandato judicial consiste en la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales, otorgado a un licenciado en derecho con cedula profesional o abogado. En éste, una persona llamada mandataria, se obliga a ejecutar actos jurídicos procesales en nombre y por cuenta del mandante.

El artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato prevé las formas a través de las cuales puede otorgarse el mandato judicial:

1. En escritura pública;

¹ Pérez Fernández, B. (2014). *Contratos Civiles*. México, D. F.: Porrúa. p. 259.



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

2. En escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el tribunal de los autos; y,
3. En comparecencia o diligencia ante dicho tribunal de manera verbal y directa.

Posteriormente, el propio numeral refiere un momento a partir del cual, el mandato judicial surte sus efectos, y, por tanto, el mandatario queda facultado para actuar en nombre y representación del otorgante:

- A. Desde el momento de la ratificación; o,
- B. Desde el momento de la designación del mandatario en comparecencia o diligencia.

Ahora bien, de la lectura integral del Capítulo Quinto «Del Mandato Judicial» correspondiente al Título Noveno, de la Segunda Parte, Libro Tercero del Código Civil para el Estado de Guanajuato –C. C.– y, de manera particular, del mismo artículo 2099, se puede advertir que la referencia a los momentos a partir de los cuales surte efectos el mandato judicial, en estricto únicamente corresponde a las siguientes formas de otorgamiento:

- 1) En escrito **presentado y ratificado ante el tribunal** de los autos –surtiendo efectos desde el momento de su **ratificación**–; y,
- 2) En **comparecencia o diligencia** ante el tribunal de **manera verbal y directa** –surtiendo efectos desde su **designación**–.

Lo anterior es de esa manera, primero, porque de manera rigurosa el mandato otorgado en escritura pública, al conformar un documento público preconstituido con valor probatorio pleno, como lo reconocen los artículos 132, 133 y 207 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato –que es la legislación por la cual el juzgador se rige para definir los alcances de las actuaciones de las partes y no podemos omitir, que el mandato judicial tiene como propósito surtir efectos en un procedimiento judicial–, tiene eficacia demostrativa plena y, por ende, es innecesario un acto posterior de ratificación o de designación.

«ARTÍCULO 132. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público, revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

ARTÍCULO 133. Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios o de los Municipios, harán fe en el Estado sin necesidad de legalización.»

«ARTÍCULO 207. Los documentos públicos hacen prueba plena. Los procedentes del extranjero tendrán el valor probatorio que les conceda el Código Federal de Procedimientos Civiles.»

A más de que, de considerar lo contrario, se pondría en duda, sin base ni razón, la fe pública de que gozan los notarios públicos –en este caso actuando como fedatarios en la elaboración y expedición de la escritura pública que contiene el mandato judicial–, que es el sentido propio de la fe estatal que les ha sido delegada por la autoridad, como se establece en artículo 3 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato.



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

«Artículo 3. Notario es el profesional del Derecho a quien se ha investido de fe pública para ejercer la función notarial.

Corresponde a los notarios recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante ellos acuden, conferir autenticidad y dar certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe a través de la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría.»

En segundo lugar, si bien el señalado dispositivo 2099 previene en uno de sus supuestos, que el mandato judicial surte efectos desde su ratificación; tampoco debe pasar desapercibido que esto lo indica a partir de un «punto y seguido», después de que se listan las diferentes formas de otorgar el mandato judicial y que entre éstas, sólo una alude a una hipótesis que conlleva ratificación. De ahí que, entonces, necesariamente el supuesto de la necesidad de ratificación para que surta efectos el mandato judicial, sólo se corresponde con la forma de otorgamiento de mandato mediante escrito presentado y ratificado ante el tribunal, y no con alguno de los demás supuestos de otorgamiento de mandato judicial y, por ello, no les resulta aplicable la ratificación.

De igual manera, en el otro de los supuestos del artículo 2099, el cual prevé que el mandato judicial surte efectos desde «la designación del mandatario en comparecencia o diligencia»; que también está prescrito a partir de un «punto u seguido» después de que se listan las diferentes formas de otorgar el mandato judicial. En consecuencia, esta hipótesis tampoco se cohonesto con el supuesto de mandato judicial otorgado en escritura pública, pues de ser así, no se emplearía la expresión de designación del mandatario (en comparecencia o diligencia), sino de redesignación, en razón de que la designación ya estaría realizada ante el notario público y de tener que reiterarse ante el juez, propiamente correspondería a una redesignación; y al no haberse consignado de este modo por el legislador, es claro que en el supuesto de la designación, no comprendió el caso del mandato judicial formalizado ante notario público.

Aún más, en éste último supuesto de surtimiento de efectos del mandato judicial, se emplea las expresiones «comparecencia o diligencia» y de la simple lectura de las diferentes formas de otorgar el mandato judicial, tenemos que la tercera justamente alude al otorgamiento en «comparecencia o diligencia». De donde deriva, de manera palmaria, que esta segunda previsión para que surta efectos el mandato judicial, sólo se refiere a la tercera de las hipótesis para su otorgamiento, y a ninguna otra.

En estas condiciones, bajo una interpretación sistemática del Título Noveno, «DEL MANDATO», podemos advertir lo siguiente:

- I. Por regla general, el mandato –base– se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, tal aceptación puede ser expresa o bien, tácita –todo acto en ejecución de un mandato–. (artículo 2057 C. C.)
- II. El mandato –base– puede ser escrito –en escritura pública; en escrito privado firmado por el otorgante y ratificada la firma ante Notario público o quien haga sus veces; o, en carta poder sin ratificación de dichas firmas– o verbal –otorgado de palabra entre presentes, hayan o no intervenido testigos–. (artículos 2060, 2061 y 2062 C. C.)
- III. El mandato debe otorgarse en escritura pública, cuando sea general o cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre del mandante, algún acto que con forme a la ley debe constar en instrumento público. (art. 2066 C. C.)



**H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO**

- IV.** Es importante resaltar que por regla general cuando el interés del negocio para que se confiere el mandato llegue a cinco mil pesos o exceda de esa cantidad, la legislación sustantiva civil impone la obligación de que un notario público –o quien haga sus veces, es decir, otro fedatario público– intervenga ya se en el otorgamiento o en la ratificación de firmas. (art. 2067 C. C.)
- V.** El mandato judicial es un mando especial. Este se puede otorgar de tres maneras, que ya señalamos.
- VI.** Como el supuesto de confección de escritura pública para otorgamiento de mandato, corresponde a uno de los supuesto base o genéricos para formalizar el mandato –en general–, regulado en las «Disposiciones Generales» del contrato de mandato (Capítulo Primero, del TÍTULO NOVENO), como también lo señalan los iniciantes, es por ello que al acogerse en las formas para el otorgamiento de mandato judicial, no existía ni existe una razón para regular o prever el momento a partir de cual surte sus efecto, porque ello ya se encuentra estipulado como regla general en el artículo 2056 del código civil local.
- VII.** De esta manera, como únicamente los supuestos de otorgamiento de mandato judicial: a) en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el tribunal de los autos; o bien, b) en comparecencia o diligencia ante dicho tribunal de manera verbal y directa; constituyen formas especiales de otorgamiento de mandato judicial; es por ello, que sólo de éstas era y es necesario el contemplar el momento a partir del cual surte efectos el mandato conferido y, en consecuencia, tal previsión no aplica al mandato judicial otorgado en escritura pública.

De las anteriores puntualizaciones advertimos que la vigente construcción normativa del artículo 2099 del código civil local, no da pauta a interpretar que el mandato judicial otorgado a través de escritura pública debe ser ratificado ante la presencia judicial, para así poder comenzar a surtir sus efectos.

Resulta importante traer a cuenta el Decreto número 188 aprobado por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, en fecha 31 de mayo del 2005, en el cual se aprobó el Dictamen formulado por la Comisión de Justicia, relativo al estudio de diversas iniciativas entre las cuales se encontraba la Iniciativa suscrita por la Diputada y los Diputados integrantes de dicha Comisión, de reforma al artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, pues del mismo se advierte la intención del legislador para incorporar a dicho artículo los momentos a partir de los cuales surten efectos los mandatos judiciales otorgados en escrito y en comparecencia o diligencia:

«Se propone esta modificación con la intención de dejar en claro que la forma de otorgamiento del mandato, se contempla en la Ley en el artículo 2099, no para el efecto de que la autoridad judicial sancione el mandato, sino sólo para que tenga conocimiento de su existencia y éste surta plenamente sus efectos.

El mandato judicial, aún con independencia del proveído del tribunal, es un contrato plenamente perfeccionado desde el momento que se manifiesta la voluntad del otorgante y la aceptación expresa o tácita (sic) del mandatario; de tal forma, que supeditar los efectos del contrato a la necesidad de que haya un proveído judicial que lo reconozca, es anular a la propia Ley y a la voluntad del legislador, con el consecuente perjuicio del otorgante y del aceptante. Si se tuviese que esperar al proveído judicial, se corre el riesgo de dejar al mandante en estado de indefensión, de que le



**H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO**

corran términos procesales en su perjuicio, o que no pueda intervenir debidamente asesorado en diligencias de carácter judicial y de gran trascendencia jurídica para los derechos en juego del proceso. Consecuentemente ello se traduce en una capitis de minutio jurídica de manera injusta, en detrimento de las partes contratantes, cancelando la voluntad de ellas; por lo tanto, y ante el reclamo de la ciudadanía y el Foro de Abogados del Estado sobre este particular, **los Diputados nos vemos en la necesidad de clarificarla y precisarla, a fin de que el mandato judicial pueda ejercerse desde el momento mismo de su ratificación cuando se otorgó por escrito, o bien desde el momento en que el mandante lo expresa de manera verbal y directa ante el tribunal de los autos.»** *[Lo resaltado es propio]*

No obstante, no se puede excluir que se presente en la realidad una mala práctica en cuanto a que se considere es necesario la existencia de un acto procesal para que surta efectos el mandato judicial otorgado ante notario público, como subyace en la exposición de motivos de iniciativa, y como ello se debería, en todo caso, a una interpretación aislada del dispositivo legal que se analiza, que a su vez revela que para algunos integrantes del foro, el dispositivo acarrea confusión. Entonces, es sano siempre abonar a un mejor y correcto entendimiento de todo dispositivo legal; en este caso, eliminando o por los menos restringiendo la posibilidad de interpretar el contenido del artículo en el sentido de que el mandato judicial otorgado en escritura pública requiere de ratificación ante la presencia judicial para surtir sus efectos.

Por otro lado, en cuanto a la propuesta de redacción del dispositivo legal que se estudia, también es conveniente considerar la construcción normativa propuesta, pues cuando se elimina la expresión y concepto **“y ratificado”**, se afecta a la segunda forma de otorgamiento del mandato judicial –«por escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el tribunal de los autos»–; lo que de acuerdo a la exposición de motivos no es la finalidad de los iniciantes.

En este mismo sentido, consideramos que se lograría una mejor estructura y entendimiento del artículo si expresa de manera separada (con puntos y aparte) los momentos a partir de los cuales surte efectos el mandato judicial de acuerdo a la forma en que haya sido otorgado. De lo contrario, si se acoge que el mandato judicial surte sus efectos a partir de su otorgamiento, sin importar la forma de su expresión, resulta que se puede trastocar seguridad que se buscó al exigir la ratificación para el mandato otorgado mediante escrito dirigido al tribunal y, además, como ya se dijo, no existe intención de los iniciantes, el modificar las formas de otorgamiento y tampoco precisar el momento en que surten sus efectos que no sea el correspondiente al concedido en escritura pública.

CONCLUSIONES

El Inileg pone a consideración de la Comisión de Justicia, en relación a la iniciativa de reformas al artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada por las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, la opinión expuesta en los párrafos, la que podemos sintetizar de la forma siguiente:

La propuesta normativa, en lo substancial, de acuerdo con su exposición de motivos, tiene como propósito eliminar el requisito de ratificación ante el tribunal de los autos, del mandato judicial otorgado por medio de escritura pública.

El artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato prevé las formas a través de las cuales puede otorgarse el mandato judicial: 1. En escritura pública; 2. En escrito presentado y



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

ratificado por el otorgante ante el tribunal de los autos; y, 3. En comparecencia o diligencia ante dicho tribunal de manera verbal y directa.

Posteriormente, el propio numeral refiere un momento a partir del cual, el mandato judicial surte sus efectos, y, por tanto, el mandatario queda facultado para actuar en nombre y representación del otorgante: A. Desde el momento de la ratificación; o, B. Desde el momento de la designación del mandatario en comparecencia o diligencia.

Ahora bien, de la lectura integral del Capítulo Quinto «Del Mandato Judicial» correspondiente al Título Noveno, de la Segunda Parte, Libro Tercero del Código Civil para el Estado de Guanajuato –C. C.– y, de manera particular, del mismo artículo 2099, se puede advertir que la referencia a los momentos a partir de los cuales surte efectos el mandato judicial, en estricto únicamente corresponde a las siguientes formas de otorgamiento: 1. En escrito **presentado y ratificado ante el tribunal** de los autos –surtiendo efectos desde el momento de su **ratificación**–; y, 2. En **comparecencia o diligencia** ante el tribunal de **manera verbal y directa** –surtiendo efectos desde su **designación**–.

Lo anterior es de esa manera, primero, porque de manera rigurosa el mandato otorgado en escritura pública, al conformar un documento público preconstituido con valor probatorio pleno, como lo reconocen los artículos 132, 133 y 207 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, tiene eficacia demostrativa plena y, por ende, es innecesario un acto posterior de ratificación o de designación. De considerar lo contrario, se pondría en duda, la fe pública de que gozan los notarios públicos, que es el sentido propio de la fe estatal que les ha sido delegada por la autoridad, como se establece en artículo 3 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato.

En estas condiciones, bajo una interpretación sistemática del Título Noveno, «DEL MANDATO», podemos advertir que, por regla general, el mandato –base– se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, tal aceptación puede ser expresa o bien, tácita –todo acto en ejecución de un mandato– (artículo 2057 C. C.). Por su parte, el mandato judicial es un mando especial, que puede otorgar de las tres maneras ya señaladas.

El supuesto de confección de escritura pública para otorgamiento de mandato, corresponde a uno de los supuesto base o genéricos para formalizar el mandato –en general–, regulado en las «Disposiciones Generales» del contrato de mandato (Capítulo Primero, del TÍTULO NOVENO), como también lo señalan los iniciantes, es por ello que al acogerse en las formas para el otorgamiento de mandato judicial, no existía ni existe una razón para regular o prever el momento a partir de cual surte sus efecto, porque ello ya se encuentra estipulado como regla general en el artículo 2056 del código civil local.

De las anteriores puntualizaciones advertimos que la vigente construcción normativa del artículo 2099 del código civil local, no da pauta a interpretar que el mandato judicial otorgado a través de escritura pública debe ser ratificado ante la presencia judicial, para así poder comenzar a surtir sus efectos.»

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 113 fracción II y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone a la Asamblea el siguiente:



ACUERDO

Único. No resulta procedente la propuesta de reforma del artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, contenida en la iniciativa presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Guanajuato, Gto., a 3 de mayo de 2018

La Comisión de Justicia.

Dip. Jorge Eduardo de la Cruz Nieto.


Dip. Ismael Sánchez Hernández


Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo.


Dip. Miriam Contreras Sandoval.


Dip. Angélica Casillas Martínez.

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de reforma del artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.